

Re: COMUNICACIÓN AUTO D-14252 DEL 24 DE MAYO DE 2021 - OFICIO REMISORIO SGC-857/21

Miguel Angel Sánchez <misalar@gmail.com>

Vie 28/05/2021 16:58

Para: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

 1 archivos adjuntos (328 KB)

Corrección demanda INCONSTITUCIONALIDAD parcial PRIMA DE LOCALIZACION 2021. D14252.pdf;

Subsanación de demanda Inconstitucionalidad Decreto Ley 415 de 1979. Ref D-14252

Estando en el término legal y procesal oportuno, allego corrección de demanda en el Expediente D-14252, conforme a comunicación SGC-857 de 26 de mayo de 2021

Atentamente

Miguel Angel Sanchez Lara.
c.c. 79.244.096

El mié, 26 may 2021 a las 8:45, Secretaria3 Corte Constitucional
(<secretaria3@corteconstitucional.gov.co>) escribió:

Reciba un cordial saludo

A continuación, le adjuntamos para su conocimiento y fines pertinentes copia del auto de fecha 24 de mayo de 2021 proferido por el Magistrado Sustanciador José Fernando Reyes Cuartas dentro del proceso **D-14252**, y el oficio remitatorio **SGC-857/21**.

Agradecemos confirmar el recibido de esta información, citando el número de la referencia (**D-14252**).

Secretaría General Corte Constitucional
Constitucionalidad Tel. 3506200 Exts: 3202, 3206 o 3207

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Bogotá, Mayo 28 del 2021

**HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Atte. Magistrada Cristina Pardo Schlesinger
Bogotá D.C.**

**Ref.: Corrección demanda - Expediente D-14252
Acción Pública de Inconstitucionalidad
Demanda contra el Artículo 8 – Parcial, del Decreto Ley 415 de 1979.**

Miguel Angel Sánchez Lara, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado y domiciliado como ya aparece en el expediente, corrijo mediante el presente escrito la demanda de la referencia, de acuerdo con lo expresado por esa alta Corporación en su auto del 24 de mayo del año 2021, mediante el cual inadmitió la demanda que presenté, y que me fue comunicado mediante correo electrónico del 26 de mayo del 2021.

A. Para enfocar adecuadamente la corrección de la demanda y hacer unas precisiones previas, encuentro oportuno transcribir primero las causales de inadmisión expuestas por esa Honorable Corte en el numeral 3 del auto preanotado:

3. Examinada la demanda, el Despacho considera que la misma debe ser inadmitida por las siguientes razones:

3.1. En primer lugar, aunque la demanda es clara y cierta, no se evidencian razones específicas, pertinentes y suficientes que permitan establecer que la vigencia de esta prima de localización efectivamente desconoce lo consagrado en los artículos 25 y 53 de la Constitución.

Al respecto, señala que en la actualidad su valor ha incrementado notoriamente y que los funcionarios ubicados en las zonas que reciben la prima al parecer no tienen mayor carga laboral. Pero estos argumentos, lejos de demostrar una contradicción con las normas superiores, reflejan un descontento con la norma que actualmente está vigente.

La exposición de las razones de la demanda, se dirigen a afirmar que el artículo es perjudicial para la institución como consecuencia del progresivo incremento de la prestación y a señalar que el pago de la prima resulta injusto para aquellos trabajadores que no están ubicados en las zonas contempladas en la ley. Pero sus argumentos no se dirigen a establecer por qué, a pesar de la finalidad de la mencionada prima, su permanencia en el ordenamiento jurídico no resulta adecuada frente al derecho al trabajo digno o a una remuneración proporcionada, entendimiento que dice, debe hacerse de los artículos superiores alegados como vulnerados.

Bajo ese contexto, revisada la demanda se advierten razones subjetivas del actor e inconformidades frente a la modificación de la ley y a la situación laboral de los trabajadores que reciben la prestación.

3.2. En segundo lugar, respecto del cargo relacionado con la violación del artículo 76 de la Constitución de 1886, es necesario recordarle al accionante que el mismo perdió vigencia con la promulgación de la Constitución de 1991.

Por esta razón, en la medida en que el parámetro de control indicado por el actor ha sido derogado, el cargo será indamitado

B. Respecto al numeral 3.1. de la inadmisión de la demanda, sustentado en que “no se evidencian razones específicas, pertinentes y suficientes que permitan establecer que la vigencia de esta prima de localización efectivamente desconoce lo consagrado en los artículos 25 y 53 de la Constitución”, y porque “sus argumentos no se dirigen a establecer por qué, a pesar de la finalidad de la mencionada prima, su permanencia en el ordenamiento jurídico no resulta adecuada frente al derecho al trabajo digno o a una remuneración proporcionada”, aclaro y corrijo la demanda, en el sentido que esta acción constitucional no tiene por objeto que la prima de localización del SENA pierda su vigencia, o no permanezca en el ordenamiento jurídico, sino que el único aspecto que se cuestiona constitucionalmente de esa prima de localización en la demanda es el incremento ordenado para la misma por el Artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979.

Por esa razón, en la demanda no se exponen argumentos para demostrar que la vigencia de esta prima de localización desconoce los artículos 25 y 53 de la Constitución, ni se anotan argumentos dirigidos a establecer que su permanencia en el ordenamiento jurídico no resulta adecuada frente al derecho al trabajo digno o a una remuneración proporcionada.

Como el único aspecto de la prima de localización del Sena que se evidencia contrario a la Constitución Política es el incremento anual del 20% que estableció textualmente para esa prestación por el Artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979, la demanda contra ese artículo es parcial y todos los argumentos están enfocados única y exclusivamente a sustentar porqué ese incremento anual vulnera la Constitución Política.

Recalco entonces al respecto y corrijo la demanda en el sentido que el único texto demandado del Artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979 es el que señala: **“Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente.**

Es importante anotar aquí, que si mi intención hubiera sido demandar la vigencia o permanencia en el ordenamiento jurídico de la prima de localización del SENA, tendría que haber demandado el Artículo 20 del Decreto Ley 1014 del 15 de junio de 1978, que fue la norma que creó realmente esa prima, como lo expresa el SENA en su comunicación No. 9-2020-040553 del 7 de octubre de 2020 emitida en respuesta al derecho de petición. Ese artículo del Decreto Ley 1014 de 1978 dispone:

*“**Artículo 20.** Los empleados públicos que prestan sus servicios en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó, y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del SENA, percibirán una prima de mil doscientos cincuenta pesos (\$1.250.00) mensuales por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrán recibir viáticos y prima de localización simultáneamente.*

Apartar del 1°. Enero de 1979, los empleados públicos que prestan sus servicios en los departamentos del Cesar y la Guajira o en Centros fijos de los Territorios Nacionales, recibirán ésta prestación.”

Del texto de esta norma se constata que el reajuste del 20% anual de la prima de localización del SENA no fue inherente a su creación, sino que fue el artículo 8 del Decreto ley 415 de 1979, que es posterior, el que ordenó el reajuste del 20% anual que hoy se demanda. Por ende, la prima de localización no fue concebida en su origen en el año 1978 como una prestación que se incrementaría exponencialmente en el tiempo con un porcentaje fijo del 20%, sino que fue una norma posterior la que le adicionó ese texto.

Sobre la viabilidad de demandar constitucionalmente una norma de forma parcial, en cuanto al monto de una prestación social o su incremento periódico sin necesidad de entrar a cuestionar la constitucionalidad de la prestación misma, existen múltiples antecedentes jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional casi desde sus inicios hasta estos tiempos, como las sentencias C-409 del 15 de septiembre de 1994, C-435 del 12 de julio de 2017 y C-083 del 27 de febrero de 2019, en las cuales esa alta Corporación analizó la constitucionalidad del incremento anual de las pensiones e incluso de sus criterios de liquidación, sin entrar a debatir la constitucionalidad de la prestación misma, y sin que el demandante sustentara razones para establecer que la vigencia de las pensiones desconoce la Constitución, ni argumentos para establecer por qué la permanencia de las pensiones en el ordenamiento jurídico no resulta adecuada frente a la constitución.

Ruego a la Honorable Corte tener en cuenta al revisar la claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de mis argumentos, que al demandar parcialmente el Artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979 no estoy demandando la constitucionalidad de la prestación social denominada “prima de localización” del Sena, ni cuestionando su vigencia, ni su permanencia en el mundo jurídico, sino que solamente estoy demandando su incremento anual del 20% ordenado textualmente por el artículo demandado parcialmente en su parte final indicada anteriormente.

Sobre un aspecto similar, la misma Corte Constitucional señaló lo siguiente dentro de sus consideraciones de la sentencia C-083 del 27 de febrero de 2019, en cuya demanda se cuestionaba solamente la forma de liquidar la pensión, y no la existencia de esa prestación:

*“2.7. En el asunto que se examina el accionante cuestiona que para aumentar en porcentaje el monto de la pensión de vejez, se requiera de un número fijo de semanas, y que las autoridades administrativas y judiciales así lo apliquen. En ese orden, en relación con el artículo 48 superior **su reproche no recae sobre la interpretación, en tanto es literal, sino sobre el contenido mismo de la norma**[16], por lo que visto de esa forma, y en aplicación del principio pro actione es posible advertir su razonamiento en cuanto a la eventual infracción del derecho a la seguridad social (claridad)”.*

En este caso, yo también estoy demandando un solo aspecto de la prima de localización del Sena (su incremento anual), y mis argumentos no son subjetivos, porque no corresponden a mi interpretación sobre la forma como se está reajustando esa prestación, sino que es literal, ya que hace referencia al contenido de la misma norma, ya que fue el mismo Artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979 el que incido textualmente que **“Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente.”**

C. Ninguna de las afirmaciones que tiene la demanda es subjetiva; todas las afirmaciones y argumentos que se escriben en la demanda están basados y respaldados en la información y las cifras elaboradas y suministrada por el mismo SENA en la respuesta al derecho de petición y en las diapositivas suministradas por esa entidad formalmente en respuesta a un derecho de petición, que anexe como prueba al expediente.

Esas cifras son fácilmente verificables de manera matemática, ya que se trata de tomar el valor de la prima de localización que establece el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 (\$1.500.00 mensuales), y aplicarle anualmente el incremento anual constante del 20%.

Pero adicionalmente, si la Corte Constitucional lo considera procedente, puede solicitarle al SENA los informes que considere necesarios, así como al Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad líder en temas de empleo público en el país.

D. A partir de lo anterior, continuó corrigiendo la demanda en cuanto a las razones específicas, pertinentes y suficientes por las cuales el incremento del 20% anual de la prima de localización del SENA, ordenado literalmente por el Artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 en su aparte demandado, vulnera la Constitución Política de Colombia.

Desde mi limitado conocimiento y punto de vista que tengo como ciudadano, acudo a la administración de justicia, en este caso, a la Honorable Corte Constitucional, para que desde su amplísimo conocimiento y su acostumbrada profundidad en el análisis de los temas constitucionales, analice y defina si es coherente con la constitución política, o contrario a la misma, que en Colombia una prestación social como la prima de localización del SENA se reajuste anualmente con el 20% fijo y constante por orden expresa del artículo 8º del Decreto Ley 415 de 1979, como ya lo ha hecho esa Honorable Corporación con otras prestaciones sociales desde hace muchos años y hasta estos tiempos, en sentencias como la C-409 del 15 de septiembre de 1.994, C-435 del 12 de julio de 2017 y C-083 del 27 de febrero de 2019, en la cual, reitero, analizó y resolvió el incremento de otra prestación social, como las pensiones, indicando que su reajuste anualmente con el IPC o con el porcentaje del salario mínimo según el caso si es constitucional, o como lo hizo en las múltiples sentencias en las cuales la Honorable Corte Constitucional analizó y emitió lineamientos para el reajuste anual de la asignación básica de los empleados públicos, y en consecuencia de sus prestaciones sociales.

Como ciudadano sin formación de abogado, yo encuentro que reajustar en Colombia una prestación social con el 20% anual fijo y constante, como la prima de localización del SENA, no es coherente con nuestra constitución nacional, por las siguientes razones, pero es la Corte Constitucional la que en su real saber y entender puede analizar este tema y resolverlo jurídicamente, como ya lo hizo para otras prestaciones sociales y para la asignación básica de los empleados públicos del estado.

Para empezar aclaro que como la Honorable Corte Constitucional ya manifestó en su auto del 24 de mayo del año 2021 que los argumentos que anoté en mi demanda son claros y ciertos, reitero lo indicado en ese escrito y para darle más razones específicas, pertinentes y suficientes a la demanda, adiciono lo siguiente:

D.1. El incremento anual del 20% de la PRIMA DE LOCALIZACIÓN del Sena que establece el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 en la parte demandada, viola el artículo 25 de la Constitución Política, en el aparte que subrayo:

"ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas".

Para argumentar la violación de esta norma, acudo al mismo criterio indicado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-815 del 20 de octubre de 1999, en la cual analizo el alcance de este artículo 25 de la constitución indicando que **"Parte bien importante de la dignidad y justicia en medio de las cuales el Constituyente exige que se establezcan y permanezcan las relaciones laborales consiste en la proporcionalidad entre la remuneración que reciba el trabajador y la cantidad y calidad de su trabajo (artículo 53 C.P.)". (...) esa remuneración ... Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación,**

experiencia y conocimientos y al tiempo durante el cual vincule su potencia de trabajo a los fines que interesan al patrono”.

Con la misma línea expuesta por la Corte Constitucional, el incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual viola las condiciones de dignidad y justicia que deben caracterizar TODAS las relaciones laborales en Colombia, porque el incremento desproporcionado y automático que tiene esa prima con ese porcentaje anual, ha generado, como lo evidencian las cifras suministradas por el mismo SENA en respuesta a su derecho de petición, que se rompa en esa entidad esa proporción que debe haber por mandato constitucional entre lo que se le paga a los empleados (remuneración) y la cantidad y calidad de su trabajo, a la preparación, experiencia y conocimientos que deben tener los empleados para desempeñar esas funciones.

Para sustentar este argumento, me remito a las cifras suministradas por el mismo Sena en la respuesta al derecho de petición que anexe como prueba a la demanda, por lo cual no es mi criterio subjetivo, sino que lo dicen claramente esas cifras, y además la Corte Constitucional lo puede corroborar con los informes que pueden rendir el mismo Sena y el Departamento Administrativo de la Función Pública; al revisar esas cifras del Sena se evidencia que en virtud de esa prima de localización (que forma parte de la asignación básica que se le paga mensualmente a los empleados en virtud de la parte inicial del mismo artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979) en este momento hay empleos de los niveles más bajos de responsabilidad y requisitos, como los de auxiliar, oficinista, secretaria y técnico, que reciben mensualmente una remuneración superior a la que se le paga en el mismo Sena a un empleado que no recibe esa prima de los niveles de responsabilidad y requisitos superiores en los niveles Instructor, Profesional e incluso directivo, y que por supuesto realizan funciones que requieren un mayor esfuerzo y una mayor preparación, experiencia y conocimientos.

Sustento lo anterior además, en el hecho de que los empleados que están ubicados en las zonas con prima de localización, realizan las mismas funciones de las personas que ocupan el mismo empleo en los departamentos sin prima de localización, porque como lo puede constatar la Honorable Corte Constitucional en el Manual de Funciones del SENA adoptado por esa entidad mediante la Resolución No. 1458 de 30 de agosto de 2017, publicado en la pagina web de esa entidad, link: <https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx>, hay un solo Manual de Funciones para toda la entidad; no existe en el Sena un Manual para los empleados con prima de localización y otro para los empleados sin esa prima, ni dentro del Manual hay diferencia entre unos y otros. Todas las personas que ocupan un mismo cargo realizan las mismas funciones a nivel nacional.

Pero si el incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual genera hoy las desproporciones e injusticias en la remuneración de los empleados del mismo Sena, que esa entidad, no yo, anota en su presentación entregada en respuesta al derecho de petición (diapositiva No. 14 denominada por esa entidad **COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE CARGOS**), en la que se observa como un Auxiliar 01 con prima de localización (que forma parte de la asignación mensual del cargo) gana más que un Profesional Grado 02 o que un Instructor Grado 15 sin prima de localización, o que un Técnico gana más que un Subdirector de Centro del nivel directivo, la injusticia y vulneración de la dignidad que debe caracterizar toda relación laboral por orden del artículo 25 de la constitución política será mayor y descomunal, cuando en el año 2029 esa prima de localización alcance un valor de \$13.650,663 única y exclusivamente por efecto de su reajuste anual con el 20%, porque en ese momento un Auxiliar grado 01 del SENA con prima de localización, tendrá una remuneración mensual superior a la del Director General de esa entidad, únicamente por el incremento anual fijo de esa prima de localización con el 20%, no porque cambien las condiciones de empleo, ni las circunstancias en las que se presta el servicio; no lo digo yo, lo dicen las matemáticas y las cifras suministradas por el mismo Sena.

Le pregunto entonces a la Corte Constitucional como ciudadano del común, ¿a la luz de la dignidad y justicia que deben caracterizar TODAS las relaciones laborales en Colombia, es constitucional que un Auxiliar 01 del SENA gane hoy más que un empleado del nivel profesional y directivo de esa misma entidad solo por el incremento de la prima de localización con el 20% ordenado por un decreto ley que fue expedido en 1979, hace más de 42 años?, y ¿es digno y justo para el Director General del SENA y por ende para todo el equipo directivo de la entidad, que un Auxiliar 01 de la misma entidad tenga en el 2029 una remuneración mayor a la ellos, solo por el incremento de la prima de localización con el 20% ordenado por un decreto ley que fue expedido en 1979, hace más de 42 años?.

Para mi como ciudadano la respuesta es no es constitucional, no por lo que yo crea o piense que es digno y justo, sino por lo que ha indicado la misma Corte Constitucional en sus sentencias en cuanto a que la Dignidad y la justicia laboral se debe traducir en una remuneración proporcionada entre la

remuneración que reciba el trabajador y la cantidad y calidad de su trabajo, y adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación, experiencia y conocimientos.

Corrijo además la demanda precisando que mis argumentos no van en contra de la prima de localización del SENA, porque esta violación de la dignidad y la justicia en el SENA no la genero la creación de la prima de localización, ya que como lo puede observar la Corte Constitucional y lo dice el SENA en los documentos que anexe como prueba a la demanda, cuando el artículo 20 del Decreto Ley 1014 de 1978 creó la prima de localización, su valor era equivalente a solo **\$1.250**, que en ese entonces era equivalente a **menos de la mitad de 1 salario mínimo**, lo cual es proporcionado y justo, y no generaba esas desproporciones, injusticias ni traslapes entre los niveles ocupacionales, las responsabilidades de los cargos, los requisitos para su desempeño y la remuneración que reciben.

Corrijo también la demanda en el sentido de que lo que genera la violación del artículo 25 de la Constitución Política no es la creación de la prima de localización, pues en su origen fue bien concebida por el artículo 20 del Decreto Ley 1014 de 1978, como una parte proporcional del salario mínimo que no afecta la escala salarial de los empleos de la entidad teniendo en cuenta que esa prima forma parte de la asignación básica de los empleos; lo que genera la violación del artículo 25 de la constitución es el incremento fijo y constante del 20% anual de esa prima ordenado posteriormente por el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979, que es la norma demandada, ya que es ese incremento el que genera hoy las injusticias y desproporciones en la remuneración de los empleados del Sena que señala esa misma entidad en la respuesta al derecho de petición que anexe como prueba a esta demanda.

Dentro del derecho al acceso a la administración de justicia, considero que como ciudadano tengo el derecho a que la Corte Constitucional analice esta situación y resuelva si es constitucional o no lo que está ocurriendo actualmente en el Sena, ya que igualmente todos sus empleados, y no solo los que reciben la prima de localización, se rigen por la constitución política y tienen derecho a una relaciones laborales dignas y justas.

D.2. El incremento anual del 20% de la PRIMA DE LOCALIZACIÓN del Sena que establece el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 en la parte demandada, viola el artículo 53 de la Constitución Política, en el siguiente aparte:

"ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; (...)"

Nuevamente para sustentar la violación de este artículo por el incremento del 20% anual fijo y constante de la prima de localización del Sena me remitiré a lo ya dicho por la Corte Constitucional sobre el tema. En múltiples sentencias de esa Honorable Corporación, como la T-102 de 1995, T-276 de 1.997, C-710 de 1.999, C-815 de 1.999, C-1433 de 2000, C- 1064 de 2001, C-551 de 2003, C-1017 de 2003, C-931/04 y C-911/12, ese máximo tribunal constitucional ha dicho que el incremento de los salarios, y en consecuencia de las prestaciones sociales, incluso de los empleados del estado, ***"debe ir en aumento, al menos año por año, con el fin de resguardar a los trabajadores del negativo impacto que en sus ingresos laborales producen la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida en una economía inflacionaria"***.

Si la Corte Constitucional ha dicho ya que el incremento de los salarios, y por ende de las prestaciones sociales tiene por objeto ***"contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que aquél en términos reales conserve su valor"***, considero que yo como ciudadano tengo derecho a acceder a la administración de justicia para saber si en criterio de la Corte Constitucional es constitucionalmente viable que exista en el Sena una prima de localización que se reajuste anualmente con el 20% anual fijo y constante, sin consideración a la inflación y el costo de vida de cada año, con lo cual ha dejado de cumplir ya ese reajuste anual con la finalidad que indico la misma Corte Constitucional de mantener la remuneración el poder adquisitivo para el trabajador, a convertirse en una prima que supera el mismo valor de la asignación básica y genera las injusticias, desproporciones y traslapes indicados anteriormente.

En mi criterio como ciudadano el reajuste de la prima de localización del Sena con el 20% anual fijo y constante si viola el artículo 53 de la constitución, porque este reajuste anual fijado hace más de 42 años resulta desproporcionado (recordemos que según el Sena en el 2020 esa sola prima fue de \$2.645.589 y que en el 2029 será de \$13.650.663) frente a la inflación y el costo de vida de cada año; para no ir tan lejos, mientras que el IPC reportó un incremento en el costo de vida de todo el 2019 del 3,8%, esa prima se incrementó en el 2020 con el 20%; que justifica constitucionalmente

ese 16,2% de incremento adicional de la prima de localización, si el Manual de Funciones del SENA sigue siendo el mismo?.

El incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual fijo, ya no está manteniendo el poder adquisitivo de la remuneración de esos empleados como lo señaló la misma Corte Constitucional al definir el alcance de aplicación del artículo 53 de la Constitución, sino que está generando un incremento exagerado e injustificado en su remuneración sin haber cambiado las condiciones del empleo, la cantidad de trabajo, ni las responsabilidades y requisitos de esos empleos.

En voces del mismo artículo 53 de la Constitución, ese incremento exagerado de la prima de localización con el 20% anual no obedece a cambios en la cantidad y calidad de trabajo de los empleados que reciben la prima de localización, porque reitero, ellos realizan las mismas funciones de quienes no reciben esa prima, de acuerdo con el Manual de Funciones de esa entidad.

Nuevamente corrijo aquí la demanda, en el sentido de aclarar que ese reajuste anual de la prima de localización no tiene relación con el origen de esa prestación social creada por el artículo 20 del Decreto Ley 1014 de 1978, sino con el aumento fijo y constante del 20% anual que ordenó el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979, hace más de 42 años.

D.3. El incremento anual del 20% de la PRIMA DE LOCALIZACIÓN del Sena que establece el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 en la parte demandada, viola el artículo 1º de la Constitución Política, en el aparte que subrayo:

"ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

El mencionado incremento viola los partes subrayados de la norma, porque el incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual fijo y constante viola nuestro estado social de derecho al permitir que existan en nuestro país empleados a los que se le reajusta anualmente sus salarios y prestaciones con los porcentajes que fija el Presidente de la República en los decretos salariales que expide de acuerdo con el costo de vida y la inflación, mientras que en el Sena hay unos empleados que reciben un reajuste anual, fijo y constante del 20%, muy por encima del resto de los empleados de la entidad y del país.

No respeta la dignidad humana ni justo para los trabajadores, que existan el Sena empleados del nivel asistencial (como los auxiliares 01) que ganan actualmente más que los empleados del nivel profesional de esa misma entidad, y que en el 2029 ganarán más que el mismo Director General del Sena, únicamente por el incremento de una prima de localización con el 20% anual ordenado hace más de 42 años por la norma demanda, sin que hayan variado las condiciones del trabajo.

Y viola el interés general de los Colombianos, porque la situación que muestran las cifras entregadas por el Sena en respuesta al derecho de petición es que la entidad no será viable en pocos años, y corre el riesgo de que desaparezca la entidad más querida de los Colombianos. Para evitar las subjetividades que mencionó la Corte Constitucional, le pregunto a esa Honorable Corporación, si en nuestro estado de derecho resulta constitucional y técnicamente viable una entidad en la que más de 1.000 personas, según la información reportada por el mismo Sena, van a ganar más que el Director General de esa entidad, únicamente por el incremento de la prima de localización sin tener en cuenta el costo de vida y las condiciones de trabajo, las responsabilidades, los requisitos y demás criterios señalados por esa misma Corporación?

D.5. Finalmente manifiesto que las pretensiones de la demanda que presenté en el escrito inicial son coherentes con todo lo que dicho anteriormente, y las correcciones de este escrito, porque éstas se enfocan exclusivamente en el incremento anual del 20% de la prima de localización del Sena, y no en la vigencia ni permanencia de esa prestación en el mundo jurídico.

Por eso, como ciudadano considero que la prima de localización del Sena es constitucional y debe continuar pagándose, pero no reajustándola anualmente con el 20%, sino con base en el costo de vida y la inflación, como lo ha dicho la misma Corte Constitucional, para que mantenga la pérdida del poder adquisitivo.

Por lo anterior, corrijo la demanda adicionando los argumentos expuestos anteriormente y reitero las pretensiones anotadas en la demanda inicial.

De los honorables Magistrados,

Atentamente:

Firma: M.A. S.
Nombre: Miguel Ángel Sánchez Lara
C. de C. No. 39244096 Dk.